

La imagen amigable de Chiquita en los Estados Unidos, oculta una historia oscura de financiamiento de violencia y desplazamiento por generaciones en Colombia.



Bajo su nombre original, la United Fruit Company, estuvo involucrada en esfuerzos para apoderarse de tierras para sus plantaciones de banano y anular el movimiento sindical que surgió en respuesta a sus abusivas prácticas laborales.



El 5 y 6 de diciembre de 1928, este abuso culminó en la "Masacre de las Bananeras", donde el ejército colombiano abrió fuego contra una multitud de manifestantes, con el resultado de más de mil muertos, en un atroz intento de proteger los intereses corporativos.

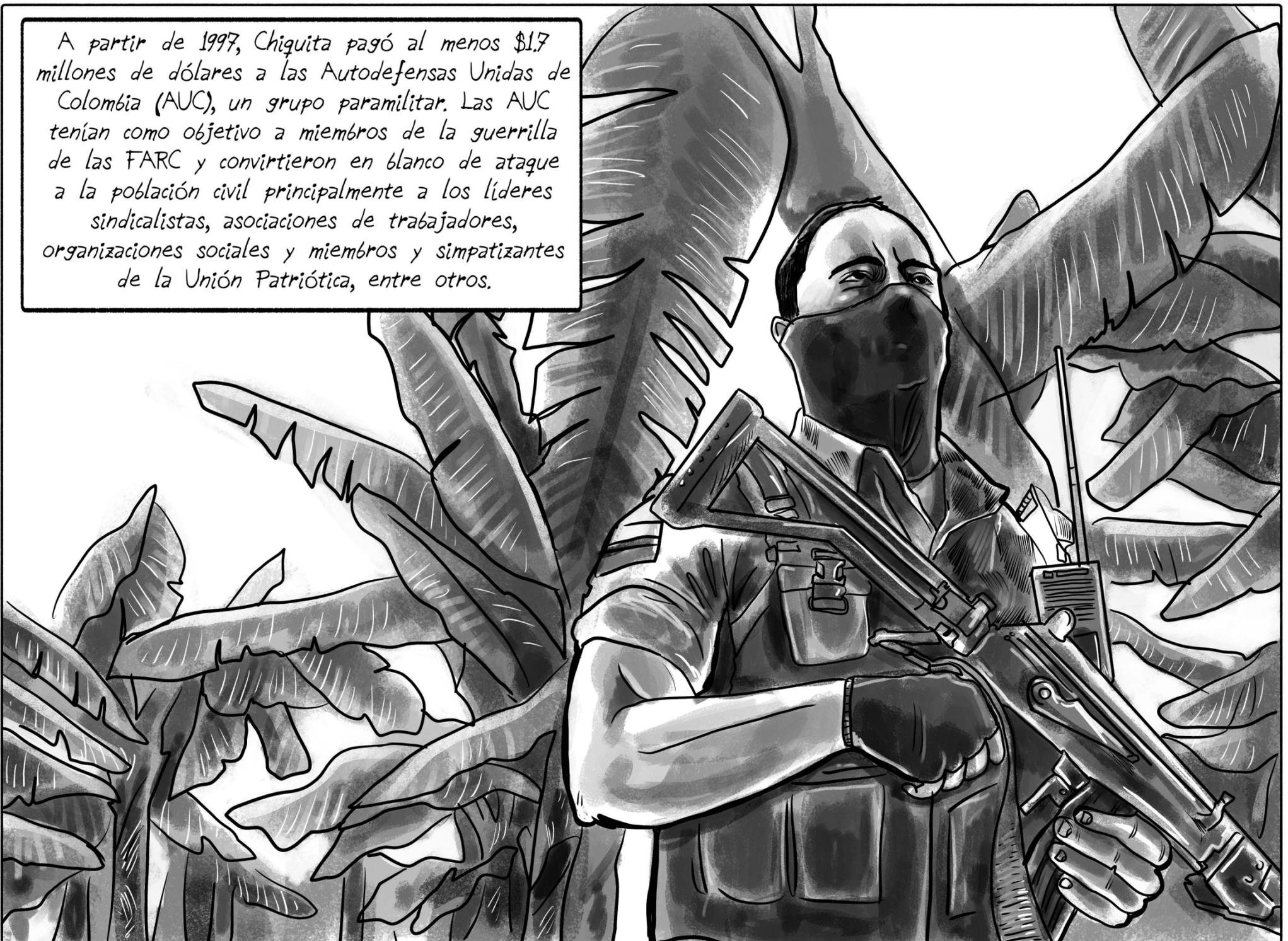


La United Fruit Company cambió su nombre a Chiquita en un intento de distanciarse de esta memoria, pero sus acciones contribuyeron a sentar las bases para futuros ataques contra las comunidades colombianas.

En 1997, los plátanos eran la tercera exportación agrícola más importante de Colombia. Más del 80% de los plátanos de Colombia se exportaban desde la región de Urabá, y el 90% de la economía de Urabá dependía de la industria bananera.



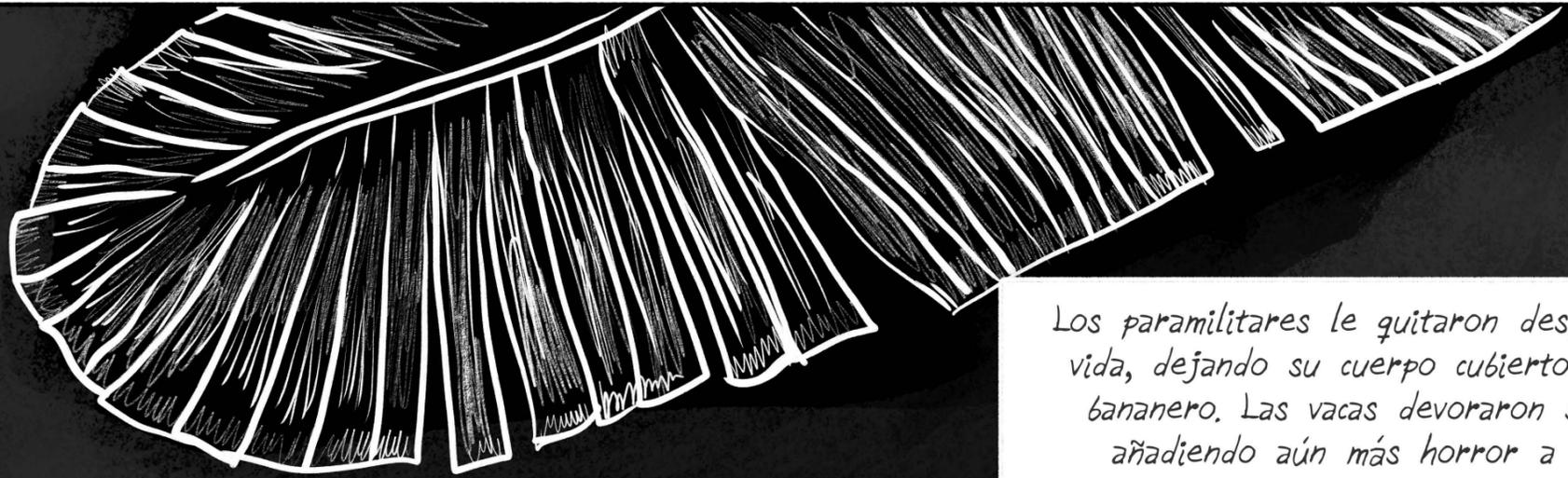
A partir de 1997, Chiquita pagó al menos \$1.7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar. Las AUC tenían como objetivo a miembros de la guerrilla de las FARC y convirtieron en blanco de ataque a la población civil principalmente a los líderes sindicalistas, asociaciones de trabajadores, organizaciones sociales y miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica, entre otros.



La familia González se convirtió en una desgarradora representación de la brutalidad que asolaba a las comunidades de la región de Urabá. Todo comenzó con el brutal asesinato de David, un hombre que pasaba sus días trabajando en una plantación de banano, en 1997.



Ese día, en puesto de control en una granja, David fue obligado a bajar del autobús en el que viajaba con su familia. Ante los ojos de sus seres queridos, los miembros paramilitares lo atacaron



Los paramilitares le quitaron despiadadamente la vida, dejando su cuerpo cubierto con hojas de bananero. Las vacas devoraron sus pulmones, añadiendo aún más horror a la tragedia.

La siniestra sombra de la violencia paramilitar no se detuvo ahí. La cuñada y la hija de David luego se convirtieron en víctimas de desaparición forzada, sumiendo a la familia en la incertidumbre y el dolor.



Mientras tanto, otro miembro de la familia González, Pedro, se encontró en el cruel dilema de ser amenazado para que abandonara su hogar.



Reconocido por ser simpatizante del partido político Unión Patriótica, y dueño de su propia parcela de tierra, la amenaza no solo buscaba expulsarlo, sino también erradicar sus raíces e identidad.



Ante la creciente oleada de amenazas, la familia González no tuvo mayor opción que abandonar su tierra natal, huyendo lejos de Urabá en un desesperado intento por encontrar un lugar seguro.



Incluso la siguiente generación no pudo escapar del siniestro destino que acechaba a la familia en su nuevo hogar.



Uno de los nietos experimentó la violencia en carne propia cuando fue sacado de su hogar en medio de la oscuridad de la noche y fue amenazado.



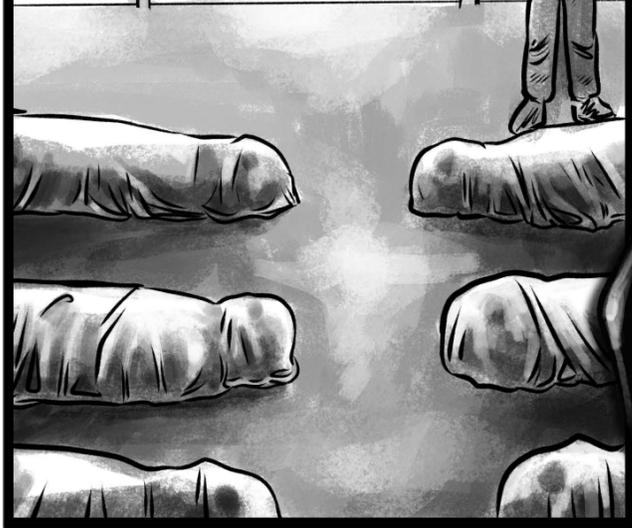
*El miedo se convirtió en un
compañero constante, y la sombra de
la violencia parecía no tener fin.*



*La crónica de la familia
González en Urabá es un relato
desgarrador de pérdida,
desplazamiento y amenazas
persistentes. Una historia que
refleja la brutalidad de un
tiempo oscuro en la región.*



Entre 1991 y 2001,
Urabá registró 97
masacres dejando más
de 600 víctimas.



Entre 1991 y 2007, 589
sindicalistas fueron
asesinados en la región
de Urabá.



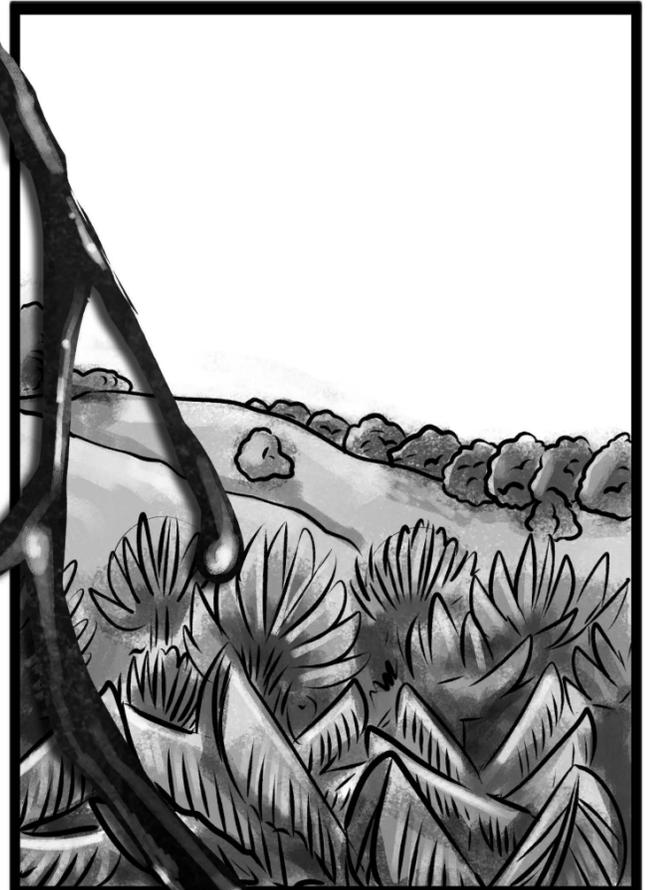
De 1997 a 2004, las AUC
fueron responsables del
desplazamiento de casi
600,000 personas.



En 1997, después del acuerdo
entre Chiquita y las AUC...



Las exportaciones de banano
aumentaron drásticamente,
alcanzando un récord histórico
de 12 millones de toneladas
exportadas.



En marzo de 2007, Chiquita se declaró culpable del delito federal de financiar a las AUC y pagó una multa de \$25 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos.



A pesar de la multa impuesta a Chiquita, las víctimas aún no han recibido reparaciones ni justicia.

En 2007, EarthRights junto con abogados de otras organizaciones, presentaron demandas federales en nombre de las víctimas.

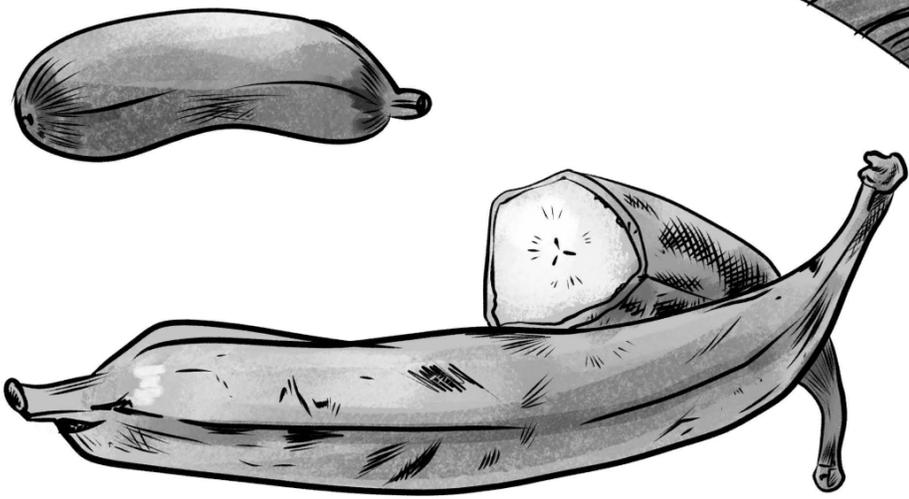


En abril de 2024, Chiquita finalmente fue llevado a juicio en el primero de numerosos casos contra la empresa. Miles aún están esperando justicia.

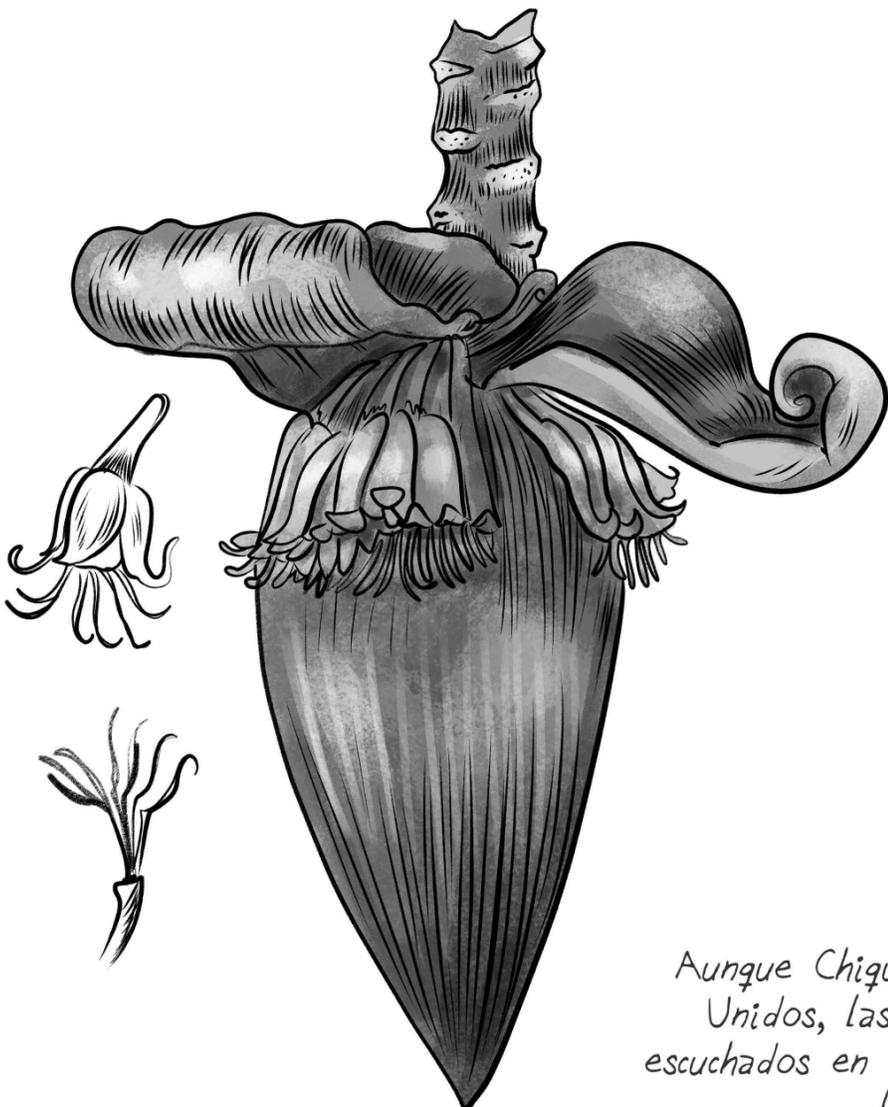
"Queremos justicia por el daño hecho a nuestra familia y a nosotros mismos, porque hasta el día de hoy seguimos sufriendo el desplazamiento".



Chiquita se declaró culpable ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por financiar al menos con \$1.7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia.



La participación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el conflicto armado de Colombia causó graves violaciones de derechos humanos, incluyendo masacres, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados, lo que resultó en miles de víctimas.



Aunque Chiquita ha pagado una multa al gobierno de los Estados Unidos, las víctimas han estado luchando durante años por ser escuchados en la corte. Chiquita debe rendir cuentas a las víctimas de la violencia que ellos ayudaron a financiar.